

Global Americans
Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Relaciones
Interamericanas y Bipartidismo
2017-2018

**Una mejor estrategia para combatir el narcotráfico, crimen organizado y
corrupción en el hemisferio**
Resumen Ejecutivo

Desde su declaración de “la guerra contra las drogas” en los años setenta, el gobierno de Estados Unidos ha gastado más de 1 billón de dólares en esfuerzos anti-narcóticos a nivel nacional y a través de América Latina y el Caribe. Entre los años fiscales 2010-2015, los gastos relacionados a esfuerzos anti-narcóticos de agencias del gobierno en el hemisferio occidental alcanzaron los 5.2 mil millones de dólares.

Sin embargo, el número de sobredosis de heroína y cocaína en Estados Unidos continua en aumento. De acuerdo con un reporte provisional del gobierno sobre el número de muertes nacionales causadas por drogas, hasta el 4 de marzo del presente año se han registrado un total de 12,802 sobredosis de cocaína y 15,258 sobredosis de heroína reportadas durante un periodo de 12 meses que terminó en agosto 2017. Ambas cifras representan aumentos sobre las cifras del periodo anterior que concluyó en agosto 2016, en donde se registraron 8,869 sobredosis de cocaína y 14,859 sobredosis de heroína.

El abuso de las drogas también se ha vuelto un problema serio en América Latina. De acuerdo con datos de 2017 publicados por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, los niveles de consumos de cocaína per capita más altos de la región se registraron en Uruguay (1.8 por ciento), Chile (1.73 por ciento), Brasil (1 por ciento) y Argentina (0.73 por ciento).

El problema de consumo de drogas en Estados Unidos ha cambiado a la misma vez que se desarrolla un debate en el hemisferio sobre cómo se podría impulsar la lucha contra las drogas, o si ésta debe de ser terminada. El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta un reto grave sobre su política anti-narcótica a nivel nacional y sufre divisiones y contradicciones en su política de drogas exterior, dado a la legalización del consumo médico o recreacional de marihuana que ha ocurrido en cerca de 30 estados y el Distrito de Columbia hasta el 2018. A la misma vez, la creciente crisis de opioides en el país, impulsada por el mal uso de analgésicos y el creciente consumo de la sustancia fentanilo, traficada desde China, y que causo 64,000 muertes en 2016—cifra duplicada en solo un año en relación al periodo anterior—ha desmontado el punto de vista tradicional que consideraba que el problema del consumo de drogas en Estados Unidos provenía en gran parte por el narcotráfico impulsado por organizaciones de América Latina y el Caribe. Estos cambios de demanda y oferta requieren que Estados Unidos y socios hemisféricos desarrollen una estrategia más holística para combatir el narcotráfico de drogas y que incluyan vertientes que consideren el rol de la prevención y las sanciones.



Global Americans

Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Relaciones Interamericanas y Bipartidismo

2017-2018

Históricamente, Washington se ha enfocado en impulsar medidas de tratar con la oferta de drogas, como la erradicación de plantaciones ilícitas, la interdicción de cargamentos ilegales y la confiscación de drogas. Pero en cuanto se desarrollan las políticas y retos, la postura de Estados Unidos a nivel nacional y a través del hemisferio también debe cambiar. Un primer paso fundamental para impulsar un cambio de política en Estados Unidos es reconocer la complejidad detrás del narcotráfico y los numerosos asuntos que conlleva este reto en sus actividades.

Por ejemplo, la estrategia de anti-narcóticos en Estados Unidos actualmente ignora las actividades de crimen organizado que no están exclusivamente basadas en el narcotráfico. Este enfoque limitado no solo arriesga a empeorar el ciclo de violencia que ya existe en la región si no también falla en tratar el deterioro de instituciones democráticas transparentes y efectivas, el crecimiento de la corrupción política y el fracaso de sistemas judiciales—y todos estos problemas son causa y efecto del surgimiento y crecimiento del crimen organizado y narcotráfico de drogas.

Para muchos grupos de crimen organizado, las ganancias que provienen de las drogas continúan representando su mayor fuente de ingresos. Pero como cualquier actividad económica ilegal, los narcotraficantes necesitan encontrar formas de lavar estas ganancias—y ellos se han vuelto más creativos. El enorme flujo de dinero que proviene del tráfico de drogas a la economía formal ha debilitado al estado de derecho, lo cual afecta la confianza de la ciudadanía ante el gobierno y empeora el sentimiento de inseguridad pública.

La estrategia de Estados Unidos no ha sido ajustada para contrarrestar los esfuerzos de lavadores de dinero para evitar su detección. Un ejemplo: mientras que la Tesorería de Estados Unidos activamente rastrea y procesa el lavado de dinero y actos de corrupción en colaboración con gobiernos de América Latina y el Caribe—actividades que directamente afectan la seguridad nacional, la aplicación de la ley y la recaudación de ingreso nacional—su enfoque se ha centrado principalmente en dos formas de lavado de dinero: la introducción de fondos ilícitos a la economía formal vía instituciones financieras y el contrabando de dinero en efectivo.

Hay una tercera forma de lavado de dinero que requiere ser examinada de manera sistemática: la incorporación de fondos ilícitos a la economía formal por la transferencia de bienes vía transferencias de valor o lavado de dinero centradas en el comercio de bienes (TBML por sus siglas en inglés). De acuerdo con un estudio de la Agencia de Censos de Estados Unidos, solamente en 2013 las “transferencias de valor” le costaron al país 219 billones de dólares y representaron 5.69 por ciento del comercio total del país ese año.

Global Americans

Grupo de Trabajo de Alto Nivel sobre Relaciones Interamericanas y Bipartidismo

2017-2018

Y los grupos de crimen organizado se están volviendo más creativos. La emergencia de una moneda descentralizada y libre de regulaciones ha impulsado a que grupos de crimen acudan a las criptomonedas y el “internet oscuro” para realizar transferencias de dinero.

La situación es mucho peor en América Latina y el Caribe. La falta de regímenes robustos que combatan el lavado de dinero en varios países ha permitido que organizaciones criminales operen con impunidad. De acuerdo con un índice anual que mide esfuerzos para combatir el lavado de dinero construido por el Instituto Basel, la falta de legislación rígida en el tema de lavado de dinero, además de la corrupción, impunidad y la falta de transparencia que facilitan ésta actividad, representan un problema endémico que existe a través de la región. En 2017, Paraguay, Haití y Bolivia figuraron entre los 25 países con más riesgo en temas de lavado de dinero a nivel mundial.

Por lo tanto, cualquier política moderna de anti-drogas necesita incorporar un fuerte elemento que combata a la corrupción a través de una estrategia amplia que incluya el fortalecimiento de instituciones de gobierno, la promoción de los derechos humanos, la reducción de la impunidad, la reducción de la desigualdad de ingresos y el fortalecimiento de sistemas de educación. Al no buscar solucionar a estos problemas estructurales, las estrategias que se centran exclusivamente en el uso de herramientas de interdicción y aplicación de la ley, pueden seriamente agravar problemas como la extorsión, los secuestros y el tráfico de personas, y estos problemas pueden debilitar procesos democráticos, el marco de los derechos humanos y la confianza de ciudadanos ante sus gobiernos.

Por lo tanto, ofrecemos una serie de recomendaciones a los líderes de Estados Unidos y del hemisferio para intentar combatir este asunto crítico. A continuación, incluimos una selección de nuestras recomendaciones:

1. **Aumentar esfuerzos para reducir el consumo de drogas.** La Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) y el Programa de Entrenamiento y Certificación para la Prevención, Tratamiento y Rehabilitación de Abuso y Violencia de Drogas, ambos operando bajo del mandato de la Organización de Estados Americanos, además de mecanismos multilaterales similares, deben ser reforzados para apoyar a los gobiernos de la región a expandir tratamientos para el abuso de sustancias y la prevención de drogas.



- 2. Expandir agresivamente los esfuerzos colaborativos para combatir la corrupción y lavado de dinero con los gobiernos de América Latina y el Caribe.** Actualmente, ni el presupuesto, el nivel de personal o los mecanismos de aplicación coordinados que están asignados a la Tesorería de Estados Unidos o el Departamento de Justicia para rastrear y procesar el lavado de dinero, son suficientes para enfrentar la magnitud del reto que existe en el hemisferio en estos frentes. Estos esfuerzos deberían formar un componente central en las relaciones bilaterales de Estados Unidos con el hemisferio.
- 3. Fortalecer sanciones dirigidas a traficantes.** Los gobiernos regionales deberían aumentar y fortalecer el uso de sanciones ante ciudadanos y servidores públicos que estén involucrados en actividades ilícitas. Se deberá aumentar el nivel de discreción que tienen los Jefes de Misión, por ejemplo, para que suspendan visas de no-inmigrante para individuos y sus familiares que sean sospechosos de estar involucrados en actividades ilícitas.
- 4. Financiar la comisión independiente establecida por la Ley de la Comisión de Política de Drogas para el Hemisferio Occidental que fue aprobada en 2016 con apoyo bipartidista.** El enfoque de las políticas anti-narcóticas regionales requiere un esfuerzo amplio y multilateral que combata al involucramiento de redes de crimen organizado en empresas legítimas. La comisión le presenta al congreso una oportunidad para apoyar una evaluación exhaustiva y bipartidista sobre las políticas de drogas de Estados Unidos en la región ante este periodo crítico.

